



Información Migratoria Nacional

IECM prepara 3ra edición de la Ruta Chilanga 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició los trabajos preparatorios de la tercera edición de la Ruta Chilanga 2025 a través de reuniones virtuales con representaciones consulares, instancias legislativas y alianzas migrantes, a fin de fortalecer la difusión de derechos político-electorales y consolidar el vínculo con la diáspora capitalina.

Según el organismo, los encuentros fueron coordinados por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Vinculación con Organismos Externos del IECM y tuvieron como propósito sumar propuestas en materia de participación ciudadana, voto desde el extranjero y acciones afirmativas dirigidas a personas migrantes originarias de la Ciudad de México que residen fuera del país.

En estas mesas de trabajo participó el secretario Ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez Yedra, junto con representantes de consulados de Estados Unidos, del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, del Instituto Nacional de Migración, del Instituto Nacional Electoral y del Programa Héroes Paisanos, así como integrantes de organizaciones migrantes y legisladoras y legisladores vinculados con la agenda migrante.

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con la credencialización para votar en el exterior, la doble ciudadanía y los trámites consulares, así como el fortalecimiento de la Red Voto Chilango y la difusión de la Ruta Chilanga.

También se analizaron estrategias para impulsar la participación de personas jóvenes y promover el Presupuesto Participativo entre comunidades migrantes, además de aspectos de la reforma electoral vinculados con la representación migrante, como las diputaciones migrantes y el uso del voto electrónico.

También se abordó el apoyo a personas en retorno y la posible mejora del Programa Héroes Paisanos, así como la promoción del voto desde el extranjero, con énfasis en personas adultas mayores que enfrentan mayores barreras de acceso a la información y a los trámites electorales.

En el intercambio participaron representaciones legislativas, entre ellas la senadora Karina Ruiz Ruiz, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero y la diputada federal Roselia Suárez Montes de Oca, quienes expusieron iniciativas orientadas a fortalecer la representación política de la comunidad migrante, mejorar los procesos de votación y consolidar módulos permanentes de credencialización en consulados.

Asimismo, manifestaron su interés en ampliar el acercamiento con comunidades chilangas en Estados Unidos y Canadá y en colaborar con organizaciones comunitarias para promover el ejercicio de los derechos políticos de las personas mexicanas residentes en el exterior.

La primera edición se llevó a cabo en 2023 con la Universidad de Santiago de Chile, mientras que en 2024 se realizó con el acompañamiento de la Red Consular de México en el exterior. Para 2025, el organismo electoral busca ampliar alianzas y fortalecer el alcance de este ejercicio de vinculación institucional. (*Gerardo Mayoral, La Crónica, Metrópoli, p. 10*)

Deplora el Senado que EU recurra a cazarrecompensas contra migrantes

Senadores de Morena deploraron que el gobierno del presidente Donald Trump, endurezca aún más la política que criminaliza a los migrantes y que acuda a métodos tan cuestionados como emplear a cazarrecompensas, por lo que se pronunciaron por un trabajo conjunto del Ejecutivo federal y el Legislativo para proteger a los connacionales.

“Tenemos que orientar a nuestros paisanos ante la nueva embestida que viola sus derechos humanos”, comentó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mientras que su compañera de bancada, Guadalupe Chavira, consideró que se deberán reforzar las medidas de apoyo, además de condenar en foros internacionales esa política inhumana hacia quienes “con su trabajo han contribuido al desarrollo y la riqueza de Estados Unidos”.

“Es lamentable esa estrategia de odio contra los migrantes y los ciudadanos del mundo, de un Trump que cada vez escala más en sus tácticas de violencia. Estamos muy conscientes de que seguirá pagando millones de dólares como recompensa a quienes buscan y entregan a trabajadores indocumentados y por ello hay que incrementar las medidas de protección a nuestros paisanos en Estados Unidos”, comentó Huerta Ladrón de Guevara.

Expuso que desde el Senado deberán tomar cartas en el asunto y valorar qué medidas de diplomacia parlamentaria y otras deben asumir frente a esa decisión de usar incluso almacenes industriales para confinar ahí a 80 mil trabajadores migrantes, ya que ello viola tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por su parte, Chavira de la Rosa consideró que “es inmoral” que el gobierno comercialice “la detención de migrantes indocumentados y permita que empresas se enriquezcan con ello”, por lo que es hora, declaró, de recuperar todos los medios diplomáticos para dialogar y hacer ver que Estados Unidos se beneficia del trabajo de los migrantes, pues tan solo la aportación económica de los latinos alcanzó los 1.6 billones de dólares en 2023.

“Es importante insistir una y otra vez que los migrantes no son delincuentes y no pueden ser tratados como si lo fueran. Son trabajadores que llegaron al vecino país del norte en busca de una vida mejor, hoy soy un soporte fundamental de la economía estadounidense”, subrayó. *(Andrea Becerril, La Jornada, P.p.)*

Sube entrada de paisanos



Nuevo Laredo.- Entre un 60 y 70 por ciento aumentó este año el ingreso de vehículos de paisanos procedentes de Estados Unidos hacia Nuevo Laredo, reportaron autoridades municipales.

Mientras que en 2024 entraron unos 47 mil vehículos con destino al interior de la República a pasar las fiestas de Navidad con sus familias, en la temporada de 2025 suman unos 75 mil 200, que representan aproximadamente 28 mil 200 más.

Humberto Fernández, director de Protección Civil local, atribuyó el auge en el flujo a la seguridad, así como la relación con el Gobierno de Laredo, Texas y la CBP. *(Benito López, Reforma, Nacional, p. 6)*

La policía texana se ensaña con los paisanos potosinos

¡Están bajando gente!, alertaban en el chat que se abrió para organizar a los más de 400 integrantes de la caravana migrante potosina. Eran casi las cinco de la mañana cuando ya había una larga fila de trocas con las bateas repletas formados para cruzar de Brownsville a Matamoros, con rumbo a San Luis Potosí.

Todos portaban un microperforado para identificarlos como parte de la caravana que las autoridades potosinas y un grupo de alcaldes organizaron para traer a los paisanos que cada año regresan a casa. Pero en esta ocasión, la policía de Texas —que colabora con migración— los esperaba todavía del lado gringo. Uno por uno fueron revisando documentos de los tripulantes de la caravana. Hubo un número incierto de detenidos.

Aquello fue algo que nunca antes se había visto, pero en esta ocasión sirvió para engrosar las cifras de detenciones y procesamiento de personas indocumentadas fichadas, ya que fueron sometidas al trámite administrativo y se les tomaron sus huellas digitales.

Así, mientras México realizaba el operativo Héroes Paisanos 20205, el gobierno de Donald Trump aprovechaba el regreso de miles para detener migrantes a segundos de regresar a México.

A Carlos lo bajaron de la camioneta. Antes de que la policía se acercara, él no sabía si tras las festividades volvería a Estados Unidos, donde ha vivido los últimos cinco años. Sin papeles, se embarcó en la aventura de regresar a casa para ver a su familia y, quizá, jugársela nuevamente con un "pollero" o, como miles de mexicanos, autodeportarse y comenzar su vida nuevamente en México, esta vez sin el temor latente de ser detenido por un agente de ICE, porque en Estados Unidos ya no existe un lugar santuario en el que los migrantes estén a salvo.

Como cada año, miles de migrantes regresan a casa para las fiestas navideñas y de fin de año, pero, a diferencia de otras ocasiones, ahora no fueron las extorsiones o la inseguridad en las carreteras el mayor riesgo en el retorno a sus comunidades.

MILENIO documentó que en el puerto de entrada de Brownsville a Matamoros, una de las rutas carreteras para el regreso a México, agentes de la policía estatal de Texas que colaboran con ICE y la patrulla fronteriza se apostaron a unos cuantos metros del punto de cruce, donde ya cientos de vehículos esperaban. Solicitaron pasaportes y residencias a los pasajeros. Prácticamente, revisaban a todos y bajaban a varias personas de los vehículos.

Van más de 145 mil mexicanos detenidos en gobierno de Trump

En casi un año de la administración de Donald Trump, han sido deportados 145 mil 537 mexicanos. Aunado a ello, muchos han optado por el camino de regreso ante el hostigamiento que enfrentan derivado de las políticas de detenciones de la administración estadounidense.

Las fiestas de fin de año han sido un pretexto para regresar con vehículos repletos, debido a que el programa Héroes Paisanos ayuda a los migrantes para evitar abusos en el cobro de impuestos por sus pertenencias nuevas o usadas.

El programa federal y las caravanas que organizan estados, como San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán o Zacatecas, les permiten llegar a sus lugares de origen con vigilancia en carreteras, para evitar robos o extorsiones, de las cuales son susceptibles.

Sin embargo, no hubo una alerta previa de la presencia de la policía antes de cruzar a territorio mexicano y eso tomó por sorpresa a aquellos en situación irregular, que se la jugaron al intentar salir o que ya iban con la forma decisión de no regresar.

[\(Liliana Padilla, Milenio, Fronteras, p. 11\)](#)

Recortes azotan a ONG que cobijan a migrantes



La falta de apoyos por parte de los gobiernos y desde el extranjero conlleva a la reducción del personal que asiste a las tareas de ayuda a los indocumentados en su paso por México.

“Se han cortado desde 2025 todos los apoyos de cooperación internacional, y eso ha afectado a instituciones, incluyendo las de migrantes, incluso algunas ya han tenido que cerrar por falta de presupuesto”.

Así lo denunció Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, tras explicar que, en años anteriores y para estas fechas, ya tenían el presupuesto para cubrir las necesidades de los siguientes 12 meses. Sin embargo, ante los recortes actuales, ahora sólo se garantizará la primera mitad del año.

“Este diciembre, sólo estamos garantizando los primeros seis meses del 2026. Eso no quiere que pensemos que no lo vamos a lograr, vamos a duplicar, triplicar o cuadruplicar esfuerzos para que en estos seis meses podamos buscar los recursos mínimos necesarios para poder sobrevivir el siguiente semestre”

Entrevistado por Ivonne Melgar para Imagen Radio, el director explicó que el crecimiento económico en Saltillo genera mayores oportunidades laborales, tanto para los nacionales como para los recién llegados.

“Es importante dejar de ver a las personas refugiadas, en situación de movilidad, como una carga; sino también como personas que están fortaleciendo la economía del país”.

Xicoténcatl coincidió en los cambios respecto al flujo migratorio, ya que los indocumentados ya no ven a México como un país de paso, sino uno de destino gracias a las oportunidades. (Redacción, *Excélsior*, *Nacional*, p. 9)

Navidad a la espera de papeles

***Tapachula.*— En el albergue Jesús el Buen Pastor dieron cena navideña para los migrantes que no han podido salir de Tapachula, Chiapas, a la espera de sus documentos.**

Rolando Fajardo, un migrante cubano, afirmó que estar lejos de su familia es difícil y triste, especialmente en estas fechas. “En primera porque no estás en tu tierra y, en segunda, estás conociendo otra cultura, otras personas...”, dijo.

Jorge, un hondureño, comentó: “Traemos una meta que es de seguirle para adelante, aunque no se pueda llegar a EU, nos quedamos en México, pero hay que confiar en Dios”. (Gaspar Romero, *Excélsior*, *Nacional*, p. 2)

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató



El 22 de agosto de 2010, el grupo criminal Los Zetas asesinó a 72 migrantes, en lo que se conoce como “la masacre de San Fernando”, ocurrida en Tamaulipas.

Los sicarios ordenaron a los 58 hombres y 14 mujeres que entraran a una bodega sin techo, en el rancho El Huizache, donde les ataron de pies y manos y vendaron los ojos, antes de fusilarlos. Eran guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, brasileños, hondureños e indios. Quince años después, la herida sigue abierta para las familias de las víctimas. EL UNIVERSAL habló con familiares de Marvin Leodan Euceda Aguilar, Glenda Yaneira Medrano Solórzano y Nancy Mariela Pineda Lacan.

“Me voy para que mis padres tengan una casa digna”

El 2 de agosto de 2010, Marvin se despidió de sus padres y hermanos en la aldea El Tamarindo, en el departamento de Comayagua, Honduras. Tenía 22 años y quería ayudar a su mamá a mejorar su casita. “Que Dios te bendiga, hijo”, le dijo su madre, Graciela Aguilar. “Van a tener su casa digna”, respondió él.

Marvin trabajaba al lado de su padre, Leopoldo Euceda, en unos terrenos donde sembraban maíz, café, calabaza y cuidaba de los árboles frutales. Sus primos y un hermano de su madre habían emigrado a EU y mandaban dinero a El Tamarindo. Eso inspiró al joven hondureño. “Decidió irse, pues. Vio lo difícil que estaba aquí. En ese tiempo empezábamos a sembrar palitos de café, porque sólo nos dedicábamos a la siembra de maíz y frijol”, rememora Álvaro, hermano de Marvin, cuatro años menor.

Marvin todavía habló con sus padres al llegar a México. Desde Tenosique, Tabasco, les pidió que le depositaran mil lempiras (250 pesos) para poder continuar hacia Veracruz y Tamaulipas. “Nos llamó y dijo que estaba bien. La última vez que habló con nosotros fue el 15 de agosto de 2010”, explica su hermano. En Tenosique se había encontrado a otros migrantes de San Pedro Sula.

La familia consiguió el dinero y le depositó. Hasta el día de hoy, no saben si pudo cobrar. No volvieron a saber de él. La madrugada del 22 de agosto, Álvaro soñó a Marvin sediento y afligido. “¡Dame un vaso de agua!”, le decía. Álvaro llevaba dos días con fiebre.

Cuando su madre escuchó que su hijo despertó abruptamente, encendió la luz del cuarto y preguntó: “¿Qué te pasa, hijo?”, pero Álvaro no quiso contar lo que había soñado. “Yo estaba asustado”, reconstruye. Graciela y Leopoldo también habían enfermado. Cuando empezó a llegar información de la masacre ocurrida en San Fernando, la familia Euceda Aguilar viajó a Tegucigalpa para saber si entre las víctimas estaba Marvin. En la Cancillería pudieron ver los primeros cuerpos que llegaron desde México, con la recomendación a sus familiares de que los inhumaran inmediatamente, pero que por ningún motivo abrieran los féretros. Sin embargo, la familia de Marvin no recibió información alguna sobre el joven, quien no portaba documentos que lo identificaran como hondureño.

Álvaro vio algunas fotografías de los migrantes masacrados, pero no pudo identificar a su hermano. El teléfono nunca más volvió a sonar desde México. Siete años después, un funcionario que llegó a El Tamarindo como parte de una brigada del Instituto Nacional Agrario contó a Álvaro que formaba parte de un comité de migrantes desaparecidos. Al enterarse de la historia de Marvin, explicó a Graciela lo que debía hacer para buscar al muchacho. Miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que visitaron Tegucigalpa, tomaron huellas dactilares y sacaron muestras de sangre a la familia.

Finalmente, el 25 de abril de 2018 la familia Euceda Aguilar confirmó, con una llamada desde México, que entre los masacrados de San Fernando estaba Marvin. Leopoldo abrió la fosa para enterrar a su hijo; invitó a sus familiares y conocidos, para el velorio, pero los restos no llegaron. Desde México les dijeron que el cuerpo sería repatriado en mayo. Leopoldo pidió a los funcionarios mexicanos que no le mintieran. En septiembre de 2018, el cuerpo llegó a El Tamarindo. A más de 15 años de la masacre, la familia Euceda Aguilar dice que no ha recibido ninguna compensación económica ni del gobierno de México ni del de Honduras. Tampoco una disculpa pública. En 2021, Nilvia Rosa, otra hermana de Marvin, partió a EU junto con sus dos hijas. “Voy a cumplir el sueño que mi hermano quiso para la familia y llevar a mis hijas a una mejor vida”, dijo. Ella lo logró.

“Queremos justicia y reparación”

El 10 de agosto, Glenda Yaneira dejó el caserío Curazao, en el cantón Las flores, departamento de La libertad, en El Salvador, con una mochila. Llevaba en ella una Biblia Reina Valera, donde guardaba una carta que su madre, Mirna Solórzano, había escrito a su esposo, Miguel Ángel Medrano, quien llevaba cinco años viviendo en Estados Unidos. Glenda decidió viajar a EU cuando su padre enfermó y dejó de mandar dinero. Glenda pensaba que, si era detenida por los agentes de Migración en México o EU, volvería a El Salvador a concluir su licenciatura de Pedagogía. Pero si lo lograba, se dedicaría a trabajar en EU como lo hacía en su tierra natal. “Los Zetas le truncaron sus sueños”, lamenta Mirna.

Como no tenía dinero para pagar al coyote, Mirna tomó las escrituras de la casa para pedir un préstamo, con un conocido de Curazao, por 6 mil 500 dólares. El 14 de agosto, Glenda llamó a Mirna. “Hola mami. Ya estoy aquí en México, ¿cómo están? Cuídense...”, dijo la universitaria. Nunca más volvió a llamar.

Miguel Ángel le contó a su esposa de la masacre de migrantes y le pidió ir a la Cancillería, cuando dejaron de tener noticias de Glenda, pero el 29 de agosto llegó un vehículo del Ministerio de Relaciones Exteriores a su casa. Un funcionario le dijo a Mirna que en el lugar de los asesinatos encontraron un Documento Único de Identidad (DUI) a nombre de Glenda, pero que no estaban seguros si el cuerpo correspondía a ella, por lo que le pidieron ir a Cancillería para que le tomaran muestras de sangre para hacer las pruebas de ADN. Un mes después, el cuerpo de Glenda llegó a Curazao. Luego de que un Equipo Argentino de Antropología Forense confirmara que se trataba de la joven, el mundo de la familia se derrumbó. La salud de Mirna y Miguel Ángel se quebrantó. Los dos hermanos de la joven cayeron en depresión. A 15 años del asesinato de su hija, Mirna exige explicaciones.

“Esperamos una respuesta del gobierno de México, que cumpla y que no quede en la impunidad lo de nuestros familiares. Queremos que nos escuchen, la verdad, justicia y reparación”.

“Voy a matar a los que asesinaron a mi mamá”

Cuando Nancy Mariela vio que su padre, Efraín; su hermano y otros familiares viajarían a EU por su cuenta, sin coyote, no se quiso quedar en Sipacate, Guatemala, donde vivían. Nancy llevaba viviendo con José casi 10 años. Tenían dos hijos. Una pequeña de tres años y un niño de cinco. Pero Nancy le suplicó a su esposo que la dejara irse, con la promesa de que en tres meses mandaría dinero para que él se les uniera.

Era 4 de agosto. La suegra de Nancy, Guillermina Vega de Sagastugue, Mina, vio a la joven salir con una mochila al hombro y una cangurera. Dos de las hermanas de Nancy intentaron impedir que se fuera.

Días más tarde, Nancy se comunicó con su suegra para decirle que estaban en Petén, que al día siguiente saldrían para México, y para preguntar por sus hijos. Luego le volvió a llamar para decirle que estaban “en el Distrito Federal” y que partirían hacia Tamaulipas. No supo más de ella. Mina y dos de sus hijas corrieron a un cibercafé y, al buscar noticias de la masacre, encontraron fotos de los migrantes asesinados. “¡Ahí está la Nancy!”, “¡Es ella!”, dijo Mina.

La mujer reconoció a Efraín Lacan, padre de Nancy, y a su hermano Richard. Efraín fue el primero en ser identificado por el Ministerio Público. Miembros de la Fundación para la Justicia y Paz explicaron a las familias qué hacer para reclamar los cuerpos. El cuerpo de Nancy fue repatriado hasta marzo de 2011.

El niño escuchó que su madre había sido asesinada en México. Buscó un cuchillo que afilaba a escondidas, porque quería cobrar venganza. “Voy a ir a matar a los que asesinaron a mi mamá”, advertía. Mina le buscó ayuda psicológica. En febrero de 2020, el hijo de Nancy llegó a Los Ángeles. “Mi mamá no lo logró, pero yo sí lo logré. Qué duro es atravesar México migrando, mamá”, le dijo por teléfono a su abuela. [\(Fredy Martín Pérez, El Universal, Mundo, p. A15\)](#)

Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

EU pide datos a turistas



Ayer entró en vigor una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que permite tomar fotografías de todos los extranjeros y recopilar los datos biométricos a los que entren y salgan del país, ya sea por aire, tierra o mar.

Esta medida afecta a todos los no ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes y trabajadores temporales, así como menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, los cuales eran exentos antes.

El DHS busca eliminar el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje y la sobrestadía. (*Redacción, El Heraldo de México, Orbe, p. 11*)

(*EFE, Milenio, Fronteras, p. 13*)

[\(Redacción, La Razón, Informativa, p. 10\)](#)

(*Efe y Afp, El Sol de México y La Prensa, Mundo, P.p. y p. 15*)

“Cacería” de Trump cambió los éxodos migrantes del mundo



Desde su candidatura, Donald Trump aseguró que realizaría la “mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos” para terminar con lo que describía como una “invasión de extranjeros ilegales” y “peligrosos criminales”.

En cuanto rindió protesta como presidente, el 20 de enero, lo primero que hizo fue militarizar la frontera y cancelar la aplicación CBP One, con el que los extranjeros solicitaban asilo. Dos días después, el Congreso, de mayoría republicana, aprobó la Ley Laken Riley, para detener y deportar a inmigrantes acusados de ciertos delitos sin una condena previa.

Y ese fue sólo el inicio. A través de una política calificada por colectivos y especialistas como “intimidatoria y de terror”, y que ha separado familias, roto el sueño americano y dejado a millones en la incertidumbre, la política antiinmigrante de Trump no hizo más que endurecerse.

Para abril, quienes tenían una autorización temporal para vivir en EU recibieron la orden de abandonar el país; luego, se propuso la deportación exprés, la “autodeportación”, y actualmente se batalla en la Corte Suprema para evitar que los hijos de migrantes ilegales adquieran la ciudadanía por nacimiento.

En julio, Trump y el gobernador de Florida, Ron De Santis, inauguraron el polémico centro de detención Alligator Alcatraz, una zona rodeada de caimanes, símbolo de su política contra los extranjeros.

Los migrantes ahora son cazados en iglesias, centros de trabajo y hasta en la vía pública, rastreándolos a través de servicios médicos o sus registros de impuestos, en ciudades que eran consideradas “santuario”, donde había un cierto protectorado hacia la comunidad trabajadora, a donde Trump amagó (o envió) a elementos de la Guardia Nacional para imponer su visión, pasando por encima de la división de poderes y de los gobernadores, usualmente demócratas.

Desde enero se tiene registro de al menos siete mil 900 redadas. Las protestas contra las operaciones policiales, que iniciaron de forma pacífica en diversas ciudades, poco a poco fueron subiendo de tono, y para junio, se registraron violentas manifestaciones en Los Ángeles, con enfrentamientos y cientos de detenidos, lo que llevó a declarar el toque de queda y el envío de la Guardia Nacional.

Estas acciones también generaron varios choques entre el gobierno de Trump y el mexicano. En abril, se difundió en televisión abierta mexicana una campaña en la que amagaba con “cazar” a los migrantes, por lo que nuestro país pidió a las televisoras retirar el spot y la Presidenta Sheinbaum anunció una reforma para prohibir propaganda política extranjera.

Otro episodio se dio en junio, cuando EU amenazó con imponer un impuesto a las remesas, lo que motivó que legisladores y personal de la Cancillería viajaran a Washington para defender dicho ingreso. Finalmente, la medida fue rechazada en el Congreso. También fueron motivo de fricción las acciones violentas contra mexicanos, como las golpizas y la muerte de al menos siete connacionales, lo que motivó notas diplomáticas.

Pero México también ha colaborado en la contención migratoria, despresurizando la frontera y evitando que las caravanas migrantes salgan de Chiapas, mediante el otorgamiento de permisos temporales, mientras que la detención de personas en situación irregular se redujo en 86.5 por ciento en los primeros nueve meses del año respecto a 2024.

Para sorpresa de nadie, la política de Trump, que amagó con terminar la migración de países “tercermundistas” dio el resultado esperado: el flujo de quienes cruzan la frontera sur de EU cayó 89 por ciento, dos millones de personas han dejado el país y más de 145 mil mexicanos han sido repatriados en lo que va del año. [\(Claudia Arellano, La Razón, Anuario 2025, p. III\)](#)

Seguridad

Capacitación a cárteles. Detectan en seis estados a mercenarios colombianos

La participación de ex militares colombianos en el entrenamiento y fortalecimiento operativo de grupos criminales en México se ha expandido por diferentes regiones del país. Lo que parecía un fenómeno aislado en Jalisco, se ha replicado, al menos, en entidades como Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En esas entidades, informes de inteligencia y reportes de detenciones han registrado la presencia de mercenarios, vinculados a diversas organizaciones criminales que buscan fortalecer su capacidad para combatir a rivales y a fuerzas del Estado.

¿Cuál es la presunta intervención del crimen colombiano en México?

El valor de los ex militares colombianos para los cárteles mexicanos radica en su formación. Muchos de ellos cuentan con experiencia adquirida durante décadas de conflicto armado interno en Colombia, ya sea como integrantes del Ejército, de grupos insurgentes o de organizaciones paramilitares.

De acuerdo con reportes de seguridad, entre las principales habilidades que transmiten se encuentra el manejo avanzado de armas de alto poder, la organización de células con jerarquías definidas y la ejecución de operaciones coordinadas.

A ello se suma la capacitación en tácticas de emboscada y guerra irregular, diseñadas para enfrentar a fuerzas de seguridad mediante el uso del terreno, la sorpresa y el desgaste del adversario.

Otro aspecto que ha encendido las alertas es la enseñanza en la fabricación y uso de explosivos. En diversas regiones del occidente y sur del país se han detectado artefactos explosivos improvisados, minas artesanales y cargas dirigidas, prácticas que antes eran poco comunes en el narcotráfico mexicano y que ahora se asocian con conocimientos importados de conflictos armados extranjeros.

Estados con presencia de tácticas colombianas

En Michoacán, especialmente en zonas colindantes con Jalisco, se han identificado campamentos clandestinos donde ex militares colombianos participan en el adiestramiento de sicarios. En estos espacios se enseñan técnicas de combate, disciplina operativa y planeación de ataques, lo que ha derivado en enfrentamientos cada vez más complejos y violentos.

Guanajuato, entidad clave por su corredor industrial y logístico, mandos de seguridad confirmaron que se ha detectado la presencia de personas colombianas, contratadas por el Cártel Santa Rosa de Lima, para enfrentar a policías civiles, principalmente en Celaya.

En el norte del país, estados como Sinaloa, Chihuahua y Durango aparecen en investigaciones que señalan la llegada de colombianos con experiencia en conflictos armados irregulares.

En estas regiones, históricamente dominadas por organizaciones con amplia trayectoria en el narcotráfico, la incorporación de combatientes extranjeros responde a la necesidad de profesionalizar estructuras criminales y adaptarse a un entorno cada vez más militarizado.

El uso de drones también forma parte de esta evolución. Más allá de su empleo como armas, estos dispositivos se utilizan para labores de vigilancia, espionaje y reconocimiento. Con ellos, los grupos criminales monitorean movimientos del Ejército y de corporaciones policiales, identifican rutas de patrullaje y planifican ataques o escapes con mayor precisión.

El reclutamiento de ex militares colombianos se da, en muchos casos, mediante ofertas laborales que prometen salarios muy superiores a los ingresos que perciben en su país de origen.

Redes informales les ofrecen trabajos de seguridad privada en el extranjero, sin detallar que el destino final es colaborar con organizaciones criminales en México. Algunos descubren la verdadera naturaleza de su trabajo una vez que se encuentran en territorio mexicano; otros son obligados a permanecer bajo amenazas o coerción.

La incorporación de estos perfiles ha tenido un impacto directo en la violencia. Los ataques son más planeados, los enfrentamientos más prolongados y el riesgo para fuerzas de seguridad y población civil se ha incrementado. Especialistas advierten que esta dinámica acerca cada vez más a los cárteles a estructuras de tipo شبه- militar, capaces de desafiar al Estado con tácticas propias de un conflicto armado.

Este fenómeno rebasa las fronteras nacionales y pone de relieve la dimensión transnacional del crimen organizado. La experiencia de un conflicto armado de larga duración se traslada ahora al servicio del narcotráfico, alimentando ciclos de violencia en distintas regiones de México.

Mientras las autoridades buscan contener esta tendencia mediante detenciones y cooperación internacional, los cárteles continúan adaptándose, incorporando conocimientos y perfiles que les permitan mantenerse en una lógica de guerra permanente.

La presencia de ex militares colombianos no solo ayuda a explicar el recrudecimiento de la violencia en varios estados del país, sino que plantea un desafío mayor para la seguridad nacional. Se trata de una amenaza silenciosa, difícil de rastrear, que evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar el crimen organizado para sostener su poder y expandir su control territorial. ([Jorge Martínez, Milenio, P.p.](#))

Van a proceso 2 guatemaltecos por ataque a GN



Dos ciudadanos guatemaltecos fueron vinculados a proceso acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército y de participar en una agresión armada contra elementos de la Guardia Nacional (GN) que dejó un uniformado muerto en Tangancícuaro, Michoacán, el pasado 7 de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de Pedro Maquin —quien también podría identificarse como Pedro Pakim o Pedro Paquim— y Leonardo Choc Ical, ambos de nacionalidad guatemalteca, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron cuando elementos castrenses realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera Gómez Farías-Francisco J. Múgica. Antes de llegar a la localidad de Francisco J. Múgica, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego contra la unidad militar.

Durante el enfrentamiento, los Guardias Nacionales abatieron a dos de los agresores y lograron capturar a los dos ciudadanos guatemaltecos, cuya detención fue informada el 9 de diciembre por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

En el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, siete cargadores, 111 cartuchos útiles, un vehículo Jeep Rubicon color gris con placas estadounidenses y reporte de robo, además de un chaleco táctico con las siglas “CJNG”.

La Fiscalía solicitó y obtuvo prisión preventiva oficiosa para ambos detenidos, además de un plazo de 60 días para completar la investigación complementaria del caso. [\(Tania Gómez, La Razón, Informativa, p. 8\)](#)

(Redacción, Milenio, Justicia, p. 8)

(Staff, Reforma, Nacional, p. 4)

Frontera con México, principal vía de ingreso del fentanilo a EU: CBP

Pese a la notable reducción en los decomisos de fentanilo registrada en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la frontera con México sigue siendo la principal vía de ingreso de esta droga ilícita a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense.

En el año fiscal 2025 en Estados Unidos, que inició en octubre de 2024 y concluyó en septiembre pasado, las autoridades estadounidenses incautaron 5.1 toneladas de fentanilo en su frontera sur, una caída de 45 por ciento frente al año previo.

En contraste, en la frontera con Canadá se decomisaron 12.47 kilogramos en el actual ejercicio fiscal no se reportan aún incautaciones.

Esta disminución en la frontera sur ha sido destacada por la administración de Sheinbaum como un resultado directo de la estrategia de seguridad de su gobierno, la cual se enfoca en el uso de inteligencia para desarticular las redes de trasiego y bloquear el flujo de precursores químicos hacia el norte.

No obstante, los datos correspondientes a lo que va del año fiscal 2026 indican un posible cambio de tendencia. En los primeros meses del periodo, las incautaciones en la frontera con México volvieron a incrementarse, con decomisos que superaron los 700 y 800 kilogramos mensuales. Si bien estas cifras aún se mantienen por debajo de los máximos alcanzados en 2023 y 2024, representan un aumento claro frente a los niveles observados durante 2025, cuando las incautaciones mensuales estaban por debajo de los 600 kilogramos, en promedio.

A pesar de que las cifras de 2025 marcaron un punto bajo histórico reciente frente a los 9.3 toneladas confiscadas en 2024 y a 12.2 toneladas de 2023, la frontera sur permanece como el epicentro del tráfico de opioides sintéticos hacia Estados Unidos.

Y es que según recientes reportes estadounidenses, entre 97 y 99 por ciento del fentanilo incautado en grandes operativos entra desde el territorio mexicano.

En tanto, la frontera norte de Estados Unidos con Canadá, registra volúmenes considerablemente menores. Entre 2023 y 2025, los decomisos mensuales rara vez rebasaron los 200 kilogramos y, en la mayoría de los casos, se mantuvieron por debajo de 50. Incluso, en los meses con mayores aseguramientos, las cantidades incautadas fueron marginales frente a las registradas en la frontera sur. " (*Arturo Sanchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 5*)